



JUZGADO VEINTIDÓS DE FAMILIA
Carrera 7 No. 12 C – 23, teléfono 3419906
Correo electrónico: flia22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá, D. C., primero (1°) de marzo del año dos mil veintiuno (2021)

INCIDENTE DE MEDIDA DE PROTECCIÓN
110013110022-2021-0000060-00

ANA ELIZABETH NOVA PAEZ contra RICARDO TORREJANO MORALES

I – Asunto

Procede el Juzgado a decidir el grado jurisdiccional de consulta al que se encuentra sometido el fallo proferido por la Comisaría Tercera de Familia de Carácter Político, dentro del incidente por incumplimiento de la medida de protección promovida por la señora ANA ELIZABETH NOVA PAEZ contra RICARDO TORREJANO MORALES

II – Antecedentes

1. Consideración preliminar

- 1.1. La señora ANA ELIZABETH NOVA PAEZ solicitó medida de protección el día 3 de mayo de 2012, contra RICARDO TORREJANO MORALES ante la Comisaría Tercera de Familia de Carácter Político, aduciendo conductas tipificadas como agresiones verbales y psicológicas en su contra por parte de su ex compañero (pág. 2).
- 1.2. Por auto de la misma fecha la Comisaría de Familia admitió la solicitud de medida de protección, otorgó medida provisional de protección y citó a las partes para audiencia de trámite (págs. 23 y 24).

- 1.3. La autoridad administrativa en audiencia celebrada el 29 de mayo de 2012, luego de escuchar al accionado y valorar las pruebas, resolvió imponer medida de protección a favor de la señora ANA ELIZABETH NOVA PAEZ (págs. 34 -37).

2. Del Incumplimiento a la Medida de Protección.

- 2.1. El día 10 de diciembre de 2020, la incidentante inició trámite de incumplimiento de la medida de protección contra RICARDO TORREJANO MORALES por nuevos hechos de agresiones de orden psicológico (pág. 66, cuaderno primer incidente).
- 2.2. La Comisaría de Familia, mediante providencia de la misma fecha admitió la solicitud de incumplimiento a la medida de protección y citó a las partes para audiencia de trámite (pág. 72, cuaderno primer incidente).
- 2.3. En audiencia de Instrucción y juzgamiento del 22 de enero de 2021, la Comisaria de Familia luego de escuchar a las partes en conflicto, declaró probado el primer incumplimiento por parte de RICARDO TORREJANO MORALES, sancionándolo con tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), advirtiéndolo sobre las sanciones, en caso de volver a incumplir dicha medida y ordenó la remisión de las diligencias en grado jurisdiccional de consulta al Juzgado de Familia (págs. 84-91, cuaderno primer incidente).

III. Consideraciones del Despacho:

1. Premisa normativa

La violencia intrafamiliar suele estar relacionada con diversas causas *“culturales, sociales, económicas, religiosas, étnicas, históricas y políticas que vulneran la*

dignidad humana”, pero la violencia históricamente ha estado inmersa en relaciones de dominio y poder entre hombres y mujeres, es por tal razón que distintas disciplinas han unido esfuerzos para promover la igualdad entre géneros y poder reducir los actos violentos al interior de las familias.

Es por ello que, la comunidad mundial consciente de dichos problemas sociales y en especial la discriminación que se dirige contra las mujeres ha desarrollado importantes tratados e instrumentos jurídicos para la protección de cualquier tipo de violencia de género, tal es el caso de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW 1981), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Siguiendo la misma preocupación e interés, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Convención de Belém do Pará (1995), prohibió todo tipo de discriminación contra la mujer y dotó de parámetros jurídicos a todos los estados adscritos a esta organización para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, verbigracia el artículo 1º de Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia (1993) define así la violencia contra la mujer *“se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”*.

Sentadas la anteriores precisiones la violencia familiar es un fenómeno social que atenta contra la unidad familiar y comprende *“todo daño o maltrato físico, psíquico o sexual, trato cruel, intimidatorio o degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión, producida entre miembros de una familia, llámese cónyuge o compañero permanente, padre o madre, aunque no convivan bajo el mismo techo, ascendientes o descendientes de éstos incluyendo hijos adoptivos, y*

en general todas las personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica.”

En ese mismo sentido en el marco de los Derechos Humanos se ha encuadrado la violencia intrafamiliar *“como aquella acción realizada al interior de la familia por uno de sus miembros, que lesionan y amenazan la vida, la integridad, la autonomía, la libertad individual y la dignidad humana de quienes la integran”*, es decir, son aquellos actos los que producen daños físicos o psíquicos, la tortura, el trato cruel - intimidatorio o degradante - la agresión, el maltrato, la amenaza, el ultraje, el agravio y cualquier otra forma de agresión, es por tal razón que todos los estado deben proscribir toda conducta que atente, amenace o vulnere la integridad familiar.

Acogiendo los conceptos y el interés internacional el Estado Colombiano mediante la ley 51 de 1981 adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la cual todos los países integrantes condenaran cualquier tipo y forma de segregación dirigida a la mujer.

Mediante la Ley 248 de 1995, la República de Colombia adoptó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de' Belém Do Pará".

En consecuencia, el artículo 93 de la Constitución Política indica que *“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”*, dichos tratados conforman lo que se conoce como el Bloque de Constitucionalidad, es decir la normas, tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por Colombia se integrarán al mandato superior interno y tendrán la misma relevancia e importancia que el derecho Constitucional interno.

Con la expedición de la Ley 294 de 1996, se materializó el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia, puesto que se establecieron las normas para

prevenir, remediar y sancionar cualquier tipo de violencia familiar, a través de esta normativa las autoridades fueron provistas de directrices jurídicas para proteger al grupo familiar e imponer ciertas medidas.

Dentro de las medidas de protección a la que puede acudir la víctimas, vale resaltar las siguientes (i) ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima; (ii) ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima; (iii) ordenar al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; (iv) y ordenar una protección temporal especial para la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo.

Posteriormente la Ley 575 del año 2000, reformó la Ley 294 de 1996, en el sentido que amplió dichas directrices jurídicas y otorgó facultad a los Comisarios de Familia, permitiéndoles la imposición de medidas de protección provisionales o definitivas contra el agresor, la solicitud de pruebas periciales, la orden de arresto y todas aquellas funciones inherentes a la protección y prevención de todas las formas de violencia intrafamiliar.

Con respecto a las sanciones que resultan como consecuencia del incumplimiento de las medidas de protección se tiene inicialmente la multa, la cual es definida por la Corte Constitucional¹ como: *"Una manifestación de la potestad punitiva del Estado que refleja el monopolio del poder coercitivo y el reproche social de la conducta de quien quebranta el orden público"*².

Igualmente ha dicho que la multa: *"constituye, por regla general, una sanción pecuniaria impuesta al particular como consecuencia de una conducta punible o por el incumplimiento de un deber y, como toda sanción, sus elementos esenciales*

1 C-185 de 2011 M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto

2 C-194 de 2005 MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

*deben estar determinados en una ley previa a la comisión del hecho de que se trate, incluyendo la cuantía y el respectivo reajuste"*³.

La competencia para definir sus elementos estructurales, las condiciones para su imposición y la cuantía es del Estado, el sentido de su aplicación se da con el fin de forzar ante la intimidación de su aplicación, al infractor a fin de que no vuelva a desobedecer las determinaciones legales y como su carácter es pecuniario, se convierte en un verdadero crédito a favor del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia ha aclarado insistentemente que *"el origen de la multa es el comportamiento delictual del individuo, no su capacidad transaccional, y su finalidad no es el enriquecimiento del erario, sino la represión de la conducta socialmente reprochable"*⁴. Tampoco tiene el alcance de una carga pecuniaria de naturaleza resarcitoria que persiga reparar el daño provocado por el delito.

2. Caso concreto

El presente trámite tiene por objeto verificar si el denunciado RICARDO TORREJANO MORALES, ha acatado las órdenes impartidas por Comisaría Tercera de Familia de Carácter Político de esta ciudad en la medida de protección No. 074-2012, o si, por el contrario, se ha hecho merecedor de las sanciones impuestas en la providencia que se consulta, por haber incumplido el incidentado la medida de protección aplicada.

En este sentido, debe señalarse que del análisis de los hechos expuestos en la solicitud y de las pruebas recaudadas, deberá confirmarse la sanción imputada por la Comisaría de Familia, pero no la tasación realizada a la misma, como se indicará posteriormente.

3 C-390 de 2002 MP Dr. Jaime Araujo Rentería.

4 C-194 de 2005 MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra.

En efecto, la Comisaría Tercera de Familia de Carácter Policivo en diligencia de audiencia programada con antelación, debidamente notificada y a la cual comparecieron las partes, resolvió imponer como sanción multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) al señor RICARDO TORREJANO MORALES, con fundamento del análisis en conjunto de las diligencias y declaraciones de la incidentante y del incidentado, entre las que se destacan, las siguientes:

En primer lugar, los cargos endilgados al victimario en la denuncia, a saber: “(...) quiero aclarar que desde marzo de 2020 a la fecha, el señor RICARDO YESID TORREJANO MORALES, me ha violentado psicológicamente, emocionalmente y mentalmente, ya que instrumentaliza a mi hijo no dejándomelo ver, toda la comunicación la redujo a un correo electrónico, donde no tengo ningún tipo de comunicación durante la pandemia y cuarentenas. Yo le pido a RICARDO YESID TORREJANO MORALES, que me permita ver a mi hijo en las fechas especiales, pero no es posible ya que RICARDO YESID TORREJANO MORALES, me dice que no tiene tiempo, me dice que si estoy enferma mentalmente que llame al médico, que mis problemas mentales no le importan a él si estoy loca o drogada, que yo soy la que maltrato a mi hijo LUCIANO, porque no lo quiero ver, el señor RICARDO YESID TORREJANO MORALES bloquea las llamadas y las redes sociales para no tener comunicación con mi hijo LUCIANO; Ricardo no me deja ir a la casa de él a visitar a mi hijo. (...) desde el mes de marzo de 2020 que inició la pandemia, tengo que aclarar que no me permitió tener a mi hijo en las vacaciones (...) solamente he visto a mi hijo desde marzo de 2020 a la fecha enero 22 de 2021, solamente he visto 5 veces a mi hijo(...) Los últimos hechos de violencia del señor RICARDO TORREJANO hacia mi fueron ayer 21 de enero de 2021 acusándome de secuestro de mi hijo LUCIANO, enviándome correos a mí y a mi familia, donde nos acusa de secuestro (...) por medio del correo electrónico, me agredió diciéndome que mis problemas mentales y de drogadicción, no eran problema de él (...) también le ha dicho a mi hijo cuando yo voy a buscarlo que soy una indeseable, vulgar (...)”.

De igual forma, de los descargos del denunciado se evidencia que aceptó parcialmente los hechos de violencia enrostrados. En efecto, en su relato indicó:

“(...) no la he agredido físicamente como ella dice, verbalmente si la he agredido diciéndole drogadicta loca, que tiene problemas mentales, porque yo le escribo correos y ella me responde otra cosa; no le he dicho prostituta (...) En cuanto al bloqueo de las llamadas al celular entre LUCIANO y su mamá, sí las he bloqueado para que no le interrumpa las clases al niño (...) yo si le impedí a ANA que viera al niño durante el primer mes de la pandemia, cuando hubo confinamiento total (...) si impido que ANA vaya a la casa a visitar al niño porque ella golpea muy fuerte la puerta (...) De marzo a la fecha ella solo ha visto 7 veces al niño (...)”, declaración que no es otra cosa que la confesión que, dicho sea de paso, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 191 del Código General del Proceso.

Así mismo, de los mensajes vía correo electrónico se colige la violencia psicológica perpetrada por el incidentado en contra de la accionante al restringirle e impedirle el contacto con su hijo ALAIN LUCIANO TORRES NOVA de 9 años de edad, limitar los canales de comunicación a su arbitrio y fijar unilateralmente el horario de las llamadas.

Por su parte, las fotocopias de fotografías de una mujer desnuda aportadas como prueba por el inculpado denotan de manera diáfana, como lo indicó acertadamente la Comisaria de Familia, la *“manipulación de la privacidad de la señora ANA ELIZABETH NOVA PAEZ, pues se aportan imágenes con contenido sexual personal de la misma, así como conversaciones que dejan entre visto situaciones de control e insinuaciones que han motivado en parte el presente trámite incidental”*.

En esta oportunidad, ha quedado demostrado que el señor RICARDO TORREJANO MORALES, ha desatendido la medida de protección que le fuera impuesta por la Comisaria de Familia al agredir verbal y psicológicamente a su ex compañera, como se desprende de la denuncia y de los descargos del implicado quien aceptó parcialmente que perpetró actos de violencia en contra de la incidentante.

Con lo anterior, no cabe duda a este Despacho que del análisis de los medios de prueba que fueron arrimados a la autoridad administrativa se puede evidenciar con certeza que los presupuestos fácticos exigidos por el legislador para sancionar a RICARDO TORREJANO MORALES se han presentado, razón por la cual esta sede judicial confirmará la decisión adoptada por la Comisaría de Familia.

No obstante, este operador judicial advierte la ausencia de sustento argumentativo en la decisión de la señora Comisaría de Familia al momento de tasar la sanción de multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), como quiera que no indicó las razones por las cuales impuso dicha multa, en contravención con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

Así las cosas, como la sanción de multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) impuesta por la autoridad administrativa carece de la debida motivación, el despacho la modificará y en su lugar la fijará en dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), atendiendo el principio de favorabilidad consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Por lo expuesto, el JUZGADO VEINTIDÓS DE FAMILIA DE BOGOTÁ, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley;

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia de fecha 22 de enero de 2021 proferida por la Comisaría Tercera de Familia de Carácter Policivo, dentro del incidente de desacato promovido por ANA ELIZABETH NOVA PAEZ contra RICARDO TORREJANO MORALES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.907.194, **MODIFICANDO** la sanción impuesta en el numeral segundo de la parte resolutive, por las razones expuestas en la motivación de este proveído, por lo que se fija como sanción al incidentado la multa de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SEGUNDO: COMUNICAR vía electrónica lo aquí decidido a las partes involucradas.

TERCERO: DEVOLVER las diligencias a la Comisaría de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente providencia. OFICIAR

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Buitrago F.', with a stylized flourish at the end.

JOSÉ RICARDO BUITRAGO FERNÁNDEZ
Juez

M.O.G.